Honduras: Balance 2010

Entre dos fuegos: la economía y la política

FOSDEH
FORO SOCIAL DE DEUDA EXTERNA
Y DESARROLLO DE HONDURAS

Honduras: Balance 2010

Entre dos fuegos: la economía y la política

FOSDEH
FORO SOCIAL DE DEUDA EXTERNA
Y DESARROLLO DE HONDURAS

FOSDEH

Foro Social de la Deuda Externa y Desarrollo de Honduras
Col. Alameda, Ave. Tiburcio Carías Andino,
Casa No. 1011, Apdo. Postal 1248,
Tegucigalpa, Honduras
Tel/fax: (504) 2239-2110/14
Correo electrónico: contacto@fosdeh.net
Página web: www.fosdeh.net

Índice

Presentación 5

1. Inestabilidad política permanente..... 8

2. La conflictividad nacional..... 14

3. El gran “logro” macroeconómico – político..... 17

4. Vamos mal..... 21

5. El cuadro social que no entra en el acuerdo 24

6. ¿Visión de País / Plan de Nación una salida
a la crisis económica? 27

Presentación

Honduras cierra el 2010 teniendo en el escenario una crisis política, arrastrada desde antes de junio de 2009, pero agravada a partir de ese mes, que acapara la atención principal, sin que se advierta que donde se juega el futuro del país es en el tablero económico, con sus respectivas consecuencias sociales. Es en la estructura productiva donde está el origen de nuestros principales problemas: la desigualdad y la exclusión, pero no todos los protagonistas del conflicto lo entienden.

El país continúo en este año con su tendencia de mayor apertura al exterior sin tener una definición clara en su política económica que tienda a una mayor competitividad en todos los aspectos requeridos, pero de manera justa y equitativa para todos y todas. El país necesita un ordenamiento integral de su economía que trascienda la voracidad de quienes solo demandan cuotas de poder, otros que tienen una visión fiscal obtusa que les impide ver la relación de estos con temas de productividad y competitividad y finalmente, de los que están en la carrera de hacer imagen política con los recursos públicos.

En cada uno de los múltiples análisis del FOSDEH, divulgados en el transcurso del año, se confirma que mientras hay quienes pasan discutiendo – con total ligereza - casi por cualquier cosa, en el país se está reproduciendo y ampliando el mismo modelo que durante los últimos 20 años ha mantenido excluida de las políticas del Estado a la mayoría de los trabajadores y productores, concentrando la riqueza en unas cuantas manos.

Este fue un año económicamente muy difícil, sobre todo para la población consumidora y para los pequeños y medianos empresarios, pero no para los grandes capitales, empresas corporativas y especuladores de oficio que siempre encuentran la manera de hacer buenos negocios cuando hay crisis y trasladar los incrementos de tasas impositivas nacionales y municipales al consumidor final. De hecho, las ganancias del sistema financiero no cesan. El capital de la banca hondureña ha crecido más de lo que ha crecido la economía, salvo en aquellas instituciones víctimas de un manejo deficiente o de la corrupción. Es tal su poder que a noviembre de este año los depósitos de

los bancos hondureños representan 46.9%, con relación al Producto Interno Bruto (PIB), índice que es superado únicamente por Panamá, Chile y Uruguay. Así mientras la mayoría pierde, unos cuantos ganan.

Entre estos "ganadores" también se encuentra el gobierno porque se beneficia del incremento a las tasas tributarias nacionales/municipales, el alza en las tarifas de los servicios públicos, y combustibles. De igual forma, las empresas de bienes y servicios al recibir incrementos, los traslada al consumidor final, que tiene a su vez que pagar más impuestos relacionados a la producción y al consumo, lo que mejora los ingresos del gobierno.

No es extraño que la mayoría de las encuestas de opinión confirmen que las preocupaciones principales de la población son la falta de empleo y la pobreza. Por encima, incluso, del temor a la violencia o de la corrupción. Diversas encuestas advierten que la ciudadanía hondureña continúa agobiada por los problemas económicos-sociales, sin soluciones efectivas y sostenibles. A lo que se suma el incremento de su desencanto frente al aspirado funcionamiento de la democracia y su desconfianza en las instituciones, en particular los partidos políticos. El elemento esperanzador, compartido por el FOSDEH, lo aporta el convencimiento ciudadano de que la democracia hondureña deba modificarse "con más democracia", es decir, la urgencia de renovar el liderazgo político nacional, que asegure las postergadas transformaciones.

Esa es una de las razones que explican porque el Balance Anual que prepara y divulga el FOSDEH tenga este año como eje central la economía. Nuestro equipo de trabajo está convencido que la crisis política –que en algunos momentos raya con lo absurdo del dogmatismo- es la vitrina o el escaparate que todos vemos, pero en la trastienda están los negocios e intereses que explican buena parte de la conflictividad.

El nuestro es un país donde los partidos políticos han sido incapaces de crear o propiciar mecanismos de resolución de las tensiones entre reformas políticas y reformas económicas. Es evidente que sin concordancia entre reformas económicas y reformas políticas para sustentar un desarrollo humano con equidad, no puede haber estabilidad democrática.

El perfeccionamiento del entorno legal y regulador, necesario para una democracia participativa, el aumento de la calidad de gobernabilidad del sector público y el fortalecimiento fiscal, son fundamentales para la reconciliación nacional. Infortunadamente esa no es la orientación actual del gobierno de Porfirio Lobo, atrapado entre bloques en pugna, y tampoco son preocupaciones de la oposición.

De hecho, la crisis política de junio de 2009 y sus posteriores repercusiones plantean en el escenario nacional la urgencia de una reforma a fondo del Estado para reforzar la capacidad pública y de la misma ciudadanía para responder a las demandas y necesidades del conjunto de la sociedad, y no sólo de su elite. Sin esa reforma no se podrá conseguir una mejor adecuación de las instituciones públicas con los cambios políticos, económicos y sociales que exige la población y las dinámicas internacionales.

El punto es ¿existe en Honduras una propuesta viable y democrática de la reforma económica o el cambio institucional que el país demanda? La respuesta es no. El mismo modelo de políticas económicas imperante divide la sociedad en “ganadores” y “perdedores”, cada uno con su propio enfoque del cambio y sus demandas.

Romper esa inercia destructiva y generar pensamiento social y económico es una prioridad para el FOSDEH y debe serlo para todo ciudadano(a) o institución comprometida con la ciudadanía que realmente desea el bien de Honduras.

Queda, entonces, en sus manos este nuevo Balance Anual, con el firme y persistente deseo de que el próximo año podamos tener mejores noticias.

FOSDEH

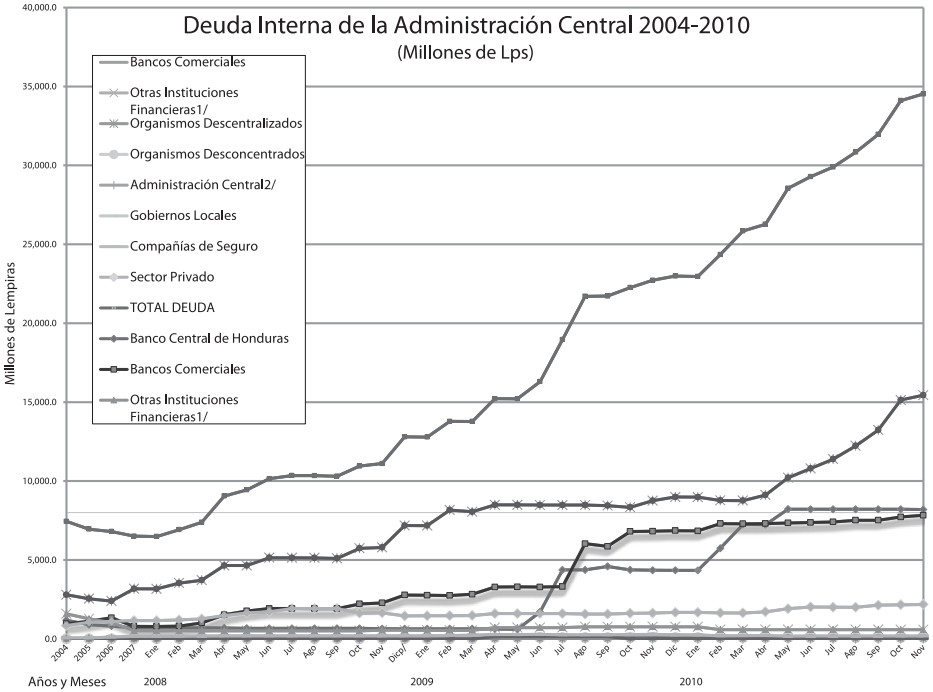
1. Inestabilidad política permanente

Lo primero a plantear es que el cuadro de condiciones políticas generales de Honduras se mantiene inestable, sin que el país logre superar el estado de polarización y confrontación que a lo largo de toda nuestra historia hemos tenido y que fue agudizado antes y especialmente durante el derrocamiento de Manuel Zelaya Rosales (junio, 2009).

Los siete meses del régimen encabezado por Roberto Micheletti, se conjuntaron con las administraciones anteriores, agravando las condiciones históricas de ingobernabilidad política, jurídica, económica, social y el aislamiento internacional, afectando el primer año de gestión del presidente Porfirio Lobo Sosa, que encabeza una gestión de múltiples precariedades.

Aún no termina de revelarse el impacto de la administración del ex presidente Zelaya, ni del período de Micheletti en la economía hondureña, pero el daño se proyecta para varios años, en todos los ámbitos: económico, social y político. Igual que en épocas anteriores, el país perdió una considerable cantidad de recursos y de credibilidad.

Durante los últimos cuatro años, 2006-2009, el endeudamiento interno pasó de 6 mil millones a más de 32 mil 546 millones de lempiras, según lo establecido por la Contaduría General de la República, quien también señaló que el déficit acumulado en estos años alcanzó más de 52 mil 497 millones de lempiras. Para noviembre de 2010, el monto de la deuda interna reportada por el Banco Central de Honduras (BCH) es de 34 mil 523 millones de lempiras (sin contar la cuasi deuda del mismo BCH), no obstante declaraciones del Secretario de Finanzas indican que la deuda interna ronda los 38 mil 115 millones de lempiras.



Preguntas primarias obligadas que surgen ante el aumento desproporcionado de la deuda interna es ¿a dónde se han dirigido todos estos recursos?, ¿qué impacto han tenido?.. también es válido preguntar qué pasó con la propuesta de auditoría forense a la deuda interna, solo que a juicio del FOSDEH, esta no debe hacerse solamente de un período en particular sino de todo el proceso de endeudamiento.

De igual forma, se continuó en el 2010 con un gasto corriente inmensurable, (aumentos salariales, acciones populistas, derroche publicitario, entre otras cosas), sin ningún asomo de prevención ante la nefasta crisis económica nacional e internacional. Las cifran indican que de cada lempira recaudado, al menos 85 centavos, se dedicó al pago de salarios y otros gastos relacionados.

Por otro lado, los gastos sin imputación presupuestaria, también continuó siendo un serio problema para las finanzas públicas en el 2010. Al 5 de octubre (último dato reportado por el SIAFI), los gastos sin imputación, nuevos y heredados de las administraciones anteriores, sumaban 11 mil 583 millones de lempiras, siendo las instituciones o áreas que más demandaron recursos: deuda pública (2,428 millones), Secretaría de Finanzas (2,015 millones), Servicios Financieros de la Administración Central (1,638 millones), Secretaría de Salud (1,229 millones) y SOPTRAVI (1,102 millones).

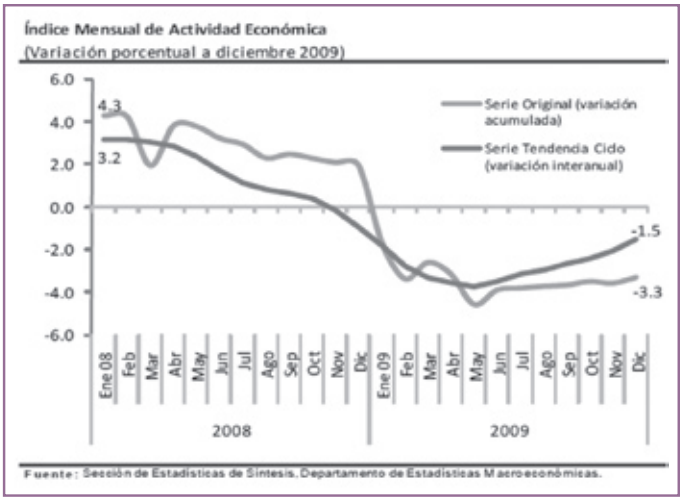
Al cierre de 2009 el 74% de la cooperación provenía de la República Bolivariana de Venezuela, en una clara señal de las dudas de la cooperación en relación al manejo administrativo del país durante la Administración Zelaya y del período de Micheletti; las reservas internaciones habían descendido y la inversión pública fija tuvo una caída de -19.1%, resultado que contrastó significativamente con las cifras registradas durante el bienio previo, cuando las tasas de crecimiento superaron el 44.0%. Al final los flujos de inversión de capital externo registraron una marcada caída de -46.2% en términos interanuales; todo un descalabro. Fueron cuatro años en los que a juicio del FOSDEH, “Honduras tocó fondo”.

Algunas graficas oficiales que lo demuestran:

Cuadro 1 Honduras: Índice Mensual de Actividad Económica
(Serie original, promedio enero - septiembre de cada año)
Base 1986 = 100

ACTIVIDADES ECONÓMICAS	Índices			Variación Relativa	
	2008	2009	2010	09/08	10/09
Agricultura, Silvicultura y Pesca	175.9	174.4	180.0	-0.9	3.2
Minas y Canteras	500.7	480.7	428.8	-4.0	-10.8
Industria Manufacturera	294.2	268.4	279.0	-8.8	3.9
Electricidad y Agua	442.8	433.3	448.2	-2.1	3.4
Construcción	375.0	244.6	204.1	-34.8	-16.6
Comercio	373.5	338.6	344.3	-9.3	1.7
Transp. y Comunicaciones	415.7	406.4	419.3	-2.2	3.1
Bancos y Seguros	332.6	319.9	330.0	-3.8	3.4
Administración Pública	155.9	166.8	171.1	7.0	2.6
Servicios Diversos	193.1	216.5	227.3	12.1	5.0
IMAE	271.0	261.0	269.9	-3.7	3.4

Fuente: Sección de Estadísticas de Ingresos, Departamento de Estadísticas Macroeconómicas, BCH.



Frente a esa herencia, dos proyectos políticos se enfrentan, uno de *continuidad* impulsado por la fuerza empresarial-militar-política responsable del status quo permanente del Estado hondureño, y el otro que pregona *cambio,* donde destaca la presencia del Frente Nacional de Resistencia Popular (FNRP), cuyo coordinador general es Manuel Zelaya Rosales. El primero mantiene su defensa de la Constitución y su propuesta de Visión de país (concretizada en la Ley de Visión de País – Plan de Nación), y el segundo demanda la instalación de una Asamblea Nacional Constituyente que apruebe otra Constitución, la número 14 en la historia nacional, y el retorno incondicional de Zelaya Rosales (actualmente en el exilio).

El FNRP aseguró haber obtenido este año más de un millón quinientas mil firmas que respaldan su demanda, en un hecho sin precedente, pero no suficiente para alterar el equilibrio tradicional del poder. Ambos sectores libran una *guerra de desgaste de baja intensidad* que explica, por un lado, los atentados no aclarados contra dirigentes populares y, por el otro lado, el incremento de huelgas, reclamos salariales, paros de labores, cortes de carreteras y múltiples accione s de desobediencia civil que hubo este año 2010. Es de hacer notar que tampoco, hasta ahora existe una valoración seria del costo económico-social de esta crisis y su impacto a futuro.

En una lectura de fondo, la confrontación tiene raíces objetivas por la extrema desigualdad económica acumulada a lo largo de la transición a la democracia y la frustración y desencanto que provocó entre la mayoría de la población. Efectivamente, mientras la transición política generaba expectativas de bienestar, la transición económica se encargaba de esfumarlas. Con la transición se construían instituciones jurídicamente formales, pero no una institucionalidad democrática real.

Sin embargo, el alto grado de conflictividad y la incapacidad de las partes para dialogar y asumir un consenso de acción mínimo, pese a la profundización de la crisis, hace suponer que la ***confrontación actual es política y económicamente rentable*** para quienes controlan o dirigen las fuerzas en pugna. La división de la sociedad, que incapacita llegar a un acuerdo, les permite, a cada quien, disponer de la fuerza, recursos y fundamentos ideológicos para *impulsar* la defensa de sus intereses. Contrario a la destrucción provocada por el huracán Mitch (1998) que convocó a la unidad (tanto interna como de la comunidad internacional), la crisis política de junio de 2009, que constituyó un Golpe de Estado, y para otros una sucesión presidencial, convocó a la desunión (tanto interna como de la comunidad internacional).

Dos comisiones tras la verdad

Los acontecimientos de junio de 2009 marcaron la fundación en el 2010 de dos comisiones de la verdad, una la Comisión de la Verdad y la Reconciliación (CVR), creada por decreto gubernamental, y la otra la Comisión de Verdad (CV), creada por la Plataforma de los Derechos Humanos. Que surgieran dos comisiones refleja la polarización y ausencia de consenso sobre temas fundamentales del país. En una sociedad profundamente dividida es difícil crear una convivencia democrática sin esclarecer los hechos que la maltrataron, de ahí la importancia de sus trabajos.

Ambas tienen un mismo escenario de acción: los hechos ocurridos antes, durante y después del Golpe de Estado del 28 de junio. De acuerdo con su decreto de creación (abril, 2010) la CVR “tendrá acceso irrestricto a la información de los entes públicos centralizados, descentralizados o desconcentrados del Poder Ejecutivo y podrá solicitar entrevistas a las personas que estime conveniente para sus funciones de esclarecimiento”.

Mientras tanto la CV “se propone investigar y establecer las violaciones de derechos humanos que se produjeron con ocasión del golpe de Estado y las que se han perpetrado hasta que finalice su mandato, identificando, de ser posible, a las personas responsables”.
De acuerdo con sus respectivos cronogramas, sus informes serán divulgados en el 2011, la CVR en el primer semestre y la CV en el segundo.
¿Qué espera la sociedad hondureña de las comisiones? Obviamente rescatar de la impunidad las violaciones a los derechos humanos cometidas en el período evaluado, y, al mismo tiempo, esclarecer las razones que explican el colapso de la institucionalidad del país. No se trata de resaltar unos hechos y unos protagonismos y borrar otros. Ambas comisiones tienen que resolver muchos obstáculos para evitar su manipulación puesto que las estructuras militares, judiciales, empresariales, mediáticas y políticas que se enfrentaron y desencadenaron los hechos siguen conservando poder o influencia. Hay a quienes no les interesa para nada saber la verdad o sólo se interesan por saber parte de la verdad o por la verdad que sirva de argumento a favor. En ese sentido, lo que se espera de ambas comisiones no es que confronten entre sí, sino que confronten la impunidad y que reivindiquen el derecho irrenunciable a conocer la verdad para reconstruir el país. El derecho a la verdad tiene fundamentos doctrinarios jurídicos y prácticos; y la verdad debe ser completa, pública e imparcial, no sólo como un deber ético ante las víctimas y sus familiares, sino ante toda la sociedad. No es que sus informes tienen la obligación de reparar lo irreparable o de superar el conflicto nacional, pero la calidad de sus trabajos, la ética y distancia crítica que logren de la política y la ideología de sus creadores será la garantía de que ayuden a evitar que hechos como los desencadenados en junio se repitan en el futuro cercano.

Los esfuerzos de la Administración Lobo-Sosa para romper el aislamiento internacional han tenido en algunos casos pocos avances y el flujo de dinero que necesita para la inversión pública sigue siendo escaso. El país continúa pendiente de su reincorporación a la OEA (en la que enfrenta la oposición de la mayoría de los países de Unasur) y su reincorporación plena al Sistema de Integración Centroamericana (en el que enfrenta la oposición del gobierno de Nicaragua).

En ese escenario en el país *se impone la necesidad de reconstruir el punto político de equilibrio* que proponga alternativas democráticas ante la inestabilidad y la convulsión social y haga frente a la crisis económica actual. Ahora bien, ¿puede el gobierno asumir esa tarea? La respuesta es que debe, pero no sabemos si puede o hasta dónde puede, y, en todo caso, que quiere, pero no lo demuestra. Su decisión de nombrar a figuras destacadas del período de Micheletti en puestos claves de su administración, permitir la militarización de la gestión pública (además de que las administraciones Zelaya y Lobo y el período de Micheletti han duplicado los presupuestos asignados a temas de Defensa y Seguridad Nacional en detrimento de otras prioridades) y su falta de condena frontal a los abusos en contra de los derechos humanos lo liga demasiado a las viejas y cuestionadas formas de hacer política. Mientras tanto, entre la mayoría de la población el desencanto aumenta e incentiva fenómenos de escape, como la emigración al exterior o un sentimiento de desapego a la vida que se refleja en sus actitudes ante los riesgos de la vulnerabilidad ambiental y el auge del crimen organizado. El desafío actual es que se puedan crear condiciones institucionales y políticas para una nueva dinámica de participación ciudadana e inclusión social.

2. La conflictividad nacional

En Honduras no es que el gobierno de Lobo Sosa haya estado inmóvil, incluso algunos sectores han intentado hacer un buen trabajo, pero no hay un rumbo común en la administración pública; persiste esa sensación de archipiélago que ha caracterizado a la gestión pública. El Presupuesto General de la República para el Gobierno Central – 2010, que sumó más de 68 mil millones de lempiras, fue ejecutado rápidamente pero no hay noticias sobre la orientación o el impacto que este gasto ha tenido, salvo escuetas declaraciones públicas de algún funcionario, que no tiene el suficiente sustento y que poco tiempo después es desmentido públicamente por falsear cifras.

Al 5 de octubre de 2010, el SIAFI (que dejó de presentar reportes desde esa fecha) indicaba haber utilizado el 77.5% del total del presupuesto asignado a las instituciones centralizadas, pero también este reporte señalaba:

- Que al mes de octubre el presupuesto del gobierno central pasó de 68 mil 230 millones a 70 mil 858 millones de lempiras, es decir que tuvo una ampliación de 2 mil 533 millones de lempiras.
- Las instituciones que concentraron la ampliación presupuestaria son: Cuenta del Desafío del Milenio (1,404 millones), Secretaría de Finanzas (207 millones), FHIS (217 millones), Instituto de Conservacion y Desarrollo Forestal (111 millones) y el Despacho Presidencial (109 millones).
- Sumado a lo anterior, se registró un monto de 11 mil 583 millones de lempiras como "gastos sin imputación", (que son valores que desembolsa la Tesorería General, sin previa afectación del Presupuesto, dado que en el momento que se autorizan, solo se registran bajo la figura de Cuentas por Cobrar); las instituciones/instancias que absorbieron más recursos fueron: deuda pública (2,428 millones), Secretaría de Finanzas (2,015 millones), la partida de Servicios Financieros de la Administración Central (1,638 millones), Secretaría de Salud (1,229 millones) y SOPTRAVI (1,102 millones).

Pese a lo anterior, las respuestas no han estado a la altura de los desafíos. Por ejemplo, sobre la temida crisis económica internacional, el daño a la economía es de alto impacto y se anticipa que el país no ha terminado de sentir su efecto, pero contradictoriamente Honduras nunca elaboró un verdadero plan anti crisis y las medidas tomadas hasta el momento, que son únicamente de orden macroeconómico, surgen más por imposición de organismos como el Fondo Monetario Internacional (FMI), que por una convicción nacional.

Lo que sí es evidente es la enorme conflictividad socio – económica en la que transcurre el país y las inmensas dificultades que la Administración Lobo Sosa tiene para administrar Honduras, (ya no gobernar, que es mucho decir). Desde que asumió la Presidencia de la República, en promedio, no ha pasado ni un solo día en el que algún un sector de la población haya salido a las calles para protestar en contra de una medida impuesta, por los intereses gremiales y políticos o por la violación a los derechos humanos, en su concepción más amplia.

La conflictividad en el 2010

a) Conflictos disminuidos respecto al 2009.

a.1. En el plano electoral se da una dudosa o falsa tregua entre los aspirantes, abiertos y encubiertos, a la candidatura presidencial de los partidos Liberal y Nacional debido a la crisis de unidad interna que padecen y la lucha por el control de los órganos de decisión entre diversas facciones. En ambos partidos sobran candidatos para pocas candidaturas.

a.2. No hay en este momento una disputa entre los presidentes de los poderes Ejecutivo y Legislativo y Judicial. El titular del Congreso, Juan Orlando Hernández, es por el momento, es el aliado principal del Ejecutivo, no obstante empiezan a advertirse diferencias entre el Poder legislativo y el Judicial.

b) Conflictos que se mantienen respecto al 2009.

b.1. El posicionamiento del FNRP que niega cualquier legitimidad al gobierno de Lobo, sin plantear en su interior el debate de si esa estrategia es correcta o empuja a Lobo al sector político más conservador.

b.2. Gremios versus Gobierno, en particular el de los maestros y otros sindicatos del sector público por demandas salariales, pese al no reconocimiento del gobierno, y en una afectación directa a la población más pobre.

b.3. Obrero-patronales, reflejadas en la precariedad de los empleos y en las propuestas de ley de empleo temporal.

b. 4. Empresarios latifundistas del agro versus movimiento campesino, que tiene en el conflicto del Aguán un referente de máxima tensión.

b.5. Empresarios del medio ambiente versus defensores del medio ambiente. Hay una oposición al control de grupos corporativos nacionales e internacionales – en particular de los generadores de energía- sobre determinados recursos estratégicos (agua, playas, bosques).

c) Conflictos en construcción en el 2010-2011.

c.1. Lobo versus la extrema derecha que domina sectores claves de la institucionalidad, como las Fuerzas Armadas, Poder Judicial y Ministerio Público. La gestión de Lobo no satisface del todo al sector más conservador que rechaza cualquier decisión que considere una concesión a Zelaya Rosales, la Resistencia y a políticas estatistas.

c.2. A favor o en contra de la convocatoria de una Asamblea Nacional Constituyente. El debate se mantendrá a corto y mediano plazo.

c.3. A favor o en contra del retorno de Zelaya Rosales y su eventual papel al interior del país.

3. El gran “logro” macroeconómico – político

El pasado 10 de septiembre, el Directorio Ejecutivo del Fondo Monetario Internacional (FMI) aprobó el financiamiento para un programa Stand By para Honduras, por un período de 18 meses, y por un monto total de alrededor de US$ 201,8 millones, que servirán “para apoyar los esfuerzos del país orientados al restablecimiento de estabilidad macroeconómica y avanzar en la implementación de reformas económicas consistentes con los objetivos de crecimiento y reducción de la pobreza en Honduras”.

Pese a que la firma del acuerdo fue celebrado a nivel nacional, y catalogado como “el principal logro económico de la Administración de Lobo Sosa”, la realidad revela que el acuerdo, por la severidad de sus condicionalidades y el proceso estricto de monitoreo que harán los funcionarios del FMI, será de difícil cumplimiento, especialmente a nivel fiscal y de contención del gasto corriente.

Pareciera que el acuerdo fue negociado, con la certeza de que el mismo no podrá cumplirse, pero que era indispensable firmarlo, para continuar con el proceso de reconocimiento internacional de la Administración Lobo Sosa y la legitimación de su política económica de frente a la cooperación internacional a fin de que esta termine de liberar los recursos, reembolsables y no reembolsables, presupuestados para el 2010 y 2011 que son vitales para el sostenimiento del país.

¿Qué concretamente señala el acuerdo con el FMI? El documento publicado de manera íntegra, casi un mes después de su negociación, tiene entre sus principales condicionalidades:

1. Mantener en menos de 30% el nivel de deuda pública con respecto al Producto Interno Bruto (PIB)
2. Aumentar la inversión pública (a partir de la puesta en marcha de la Ley Público Privada)
3. Aumentar el gasto en pobreza, a partir del Bono 10 mil
4. Implementar y fortalecer las reformas a nivel tributario
5. Controlar el gasto corriente

6. Fortalecer la Posición Financiera de la Empresas Públicas y los Fondos de Pensiones
7. Reducción del Déficit Global del Sector Público
8. Mantener en menos del 6% el nivel de inflación
9. Fortalecer las Reservas Internacionales
10. Contener el déficit en cuenta corriente en un 7% del PIB

¿Es posible el cumplimiento de estas metas? Esta es una respuesta que se irá construyendo y revisando mes a mes, sin embargo gran parte de las "recomendaciones" hechas por el FMI son las que tradicionalmente han incumplido todos los gobiernos (como la contención del gasto corriente, manejo prudente del endeudamiento, niveles manejables de déficit, etc.). ¿Qué es lo extraño entonces?.

A juicio del FOSDEH, lo que no parece advertir el Fondo, es la dimensión de la complejidad y fragilidad económica-social del país. Las condicionalidades impuestas únicamente se realizan en el ámbito macroeconómico, especialmente en el área de mejora en la recaudación tributaria y de control del gasto, dejando por fuera el impacto a nivel microeconómico, el que tiene que ver con la economía de los hogares, de la pequeña y mediana empresa y con la urgente necesidad de realizar acciones que aumenten la productividad y por ende los ingresos del país.

Por ejemplo, el FMI se conforma con la presentación de medidas tributarias cortoplacistas, que dan una aparente estabilidad económica, pero sus recomendaciones no logran atacar lo injusto e inequitativo del sistema tributario, como tampoco alcanzan las metas económicas que se proponen.

Gran parte de la firma del nuevo acuerdo con el FMI se sustenta en la aprobación de la "Ley de fortalecimiento de los ingresos, equidad social y racionalización del gasto público" (Paquetazo 1) y en la promesa de aprobación del proyecto de Ley de Actualización del Sistema Tributario, Aduanero, y Medidas Anti evasión (Paquetazo 2), sin embargo los resultados obtenidos hasta el momento no son muy satisfactorios.

El fracaso inicial del primer paquete de medidas fiscales impuestas por la Administración Lobo es tan fuerte que se asemeja a la torpeza de querer sacarle sangre a un paciente con grados alarmantes de anemia. La meta del

gobierno con dicha medida era recolectar alrededor de 3,500 millones de lempiras anuales (aproximadamente 7 mil millones en dos años), que eran adicionales a la meta proyectada por las autoridades de la Dirección Ejecutiva de Ingresos (DEI); no obstante al 31 de diciembre se habían logrado recaudar 44,224 millones de lempiras, de los 46,432.80 millones de lempiras que era la meta inicial de recaudación de la DEI para el presupuesto 2010 y pero 5,708 millones menos de los 49,932 millones que era la meta posterior al ajuste.

En el siguiente cuadro se puede establecer con claridad el tipo de impuestos que presentaron indicadores positivos y negativos, al 31 de diciembre de 2010. Vale la pena puntualizar que aquellos impuestos relacionados con el consumo y la producción son los que presentan mayores niveles de regresión, lo que contrasta con las condiciones precarias de la economía del país y de la familia hondureña en particular.

Recaudación Tributaria a diciembre de 2010

(Cifras expresadas en millones de lempiras)

NOMBRE DE IMPUESTO	Recaudado	Presupuestado	Diferencia	% Ejecución
INGRESOS CORRIENTES	44,224.26	46,432.80	-2,208.54	95.2%
INGRESOS TRIBUTARIOS	41,606.37	43,262.00	-1,655.63	96.2%
IMPUESTO SOBRE LA RENTA	12,436.99	13,055.20	-618.21	95.3%
APORTACION SOLIDARIA TEMPORARI	919.51	1,253.50	-333.99	73.4%
IMPUESTO SOBRE LA PROPIEDAD	570.45	381.70	188.75	149.5%
IMP.S PRODUC.,CONS.Y VENTA	17,745.55	19,155.90	-1,410.35	92.6%
SOBRE VENTAS (12%)	14,750. 55	16,506.00	-1,755.45	89.4%
SOBRE VENTAS (15%)	830.89	675.00	155.89	123.1%
IMPTO.S/SERV.Y ACT.ESPECIFICAS	8,430.79	8,302.20	128.59	101.5%
APORTE ATE.PROG. SOC. Y CONS.P	6,236.57	6,613.00	-376.43	94.3%
IMPUESTO S/LAS IMPORTACIONES	2,413.57	2,354.20	59.37	102.5%
IMPTO.BENEF.EVENT. JUEGOS AZAR	9.00	12.80	-3.80	70.4%
IMPUESTOS NO TRIBUTARIOS	2,513.84	2,481.50	32.34	101.3%
TASAS	561.70	827.10	-265.40	67.9%
DERECHOS	292.96	159.80	133.16	183.3%
CANONES Y REGALIAS	1,286.62	1,231.90	54.72	104.4%

MULTAS	216.95	132.50	84.45	163.7%
OTROS NO TRIBUTARIOS	155.60	130.20	25.40	119.5%
VENTA DE BIENES Y SERVICIOS	61.46	16.60	44.86	370.3%
VENTA DE BIENES	7.69	13.40	-5.71	57.4%
VENTA DE SERVICIOS	53.77	3.20	50.57	1680.4%
INTERESES,BENEF.ALQUILERES Y D	4.58	34.2	-29.62	13.4%
TRANSFERENCIAS Y DONACIONES CO	38.00	638.50	-600.50	6.0%

Fuente: Elaboración propiadel FOSDEH, en base a los datos de la unidad de servicios fiscales del BCH.

Por otra parte, en algunas de las nuevas cargas fiscales impuestas a través del "paquetazo", a diciembre, no se pudo recaudar ni un solo lempira, o registran datos mínimos, no obstante, en las tasas de grabación directa a la población son las que más recursos se obtuvieron tal y como se demuestra en la siguiente tabla:

Nombre del impuesto	Millones de lempiras
10% sobre excedente de operaciones de centros educativos	0.00
Alquiler habitacional (10%)	0.1 3
Retención anticipo ISR 1%	6.35
S/ventas (18%) boletos de transporte	7 .37
S/ventas 5% boletos lotería electrónica	3 .11
Tasa por l lamada del exterior	133. 8 9
Ecotasa s/importación de vehículos	80 .59
Actos administrativos de la DEI	7.82
Subastas DEI	4.48

Al margen de los argumentos oficiales, lo que demuestran estas cifras es la misma contradicción de fondo de todos los paquetazos establecidos: tratar de restaurar cierto equilibrio financiero pero a costa del "sacrificio" de la población con menos recursos y de la clase media. Tal como lo demuestra la tabla anterior, el impuesto que registra mayores niveles es la "tasa por llamada del exterior", que está directamente ligada con la población que recibe remesas del exterior y que está en permanente contacto con sus familiares.

Hasta el momento, todos los programas de ajuste y acuerdos con el FMI han estado desligados del interés de impulsar una reactivación del estancado aparato productivo, al grado que en lugar de ofrecer estímulos para salir de la recesión crónica que afecta al país, más bien lo hunde más en ella. En resumen, el país no ha revertido su tendencia a profundizar su "política fiscal perversa" impuesta con mayor énfasis desde 1990.

4. Vamos mal

El vaticinio de que la crisis política y social agravaría la económica se está cumpliendo en Honduras, sobre todo en lo que se refiere a ingresos al fisco y a los bolsillos de la mayoría de la población. El Instituto Nacional de Estadísticas (INE) reporta un incremento de desempleo abierto, lo que implica un aumento respecto a años anteriores en los cuales era menor al 10% de la PEA.

Las cifras de desempleo a mayo 2010 de la Encuesta de Hogares del INE, indica que la Tasa de Desempleo Abierta (TDA) es de 3.9%, lo que representan 133 mil 737 personas de la Población Económicamente Activa (PEA); en mayo 2008, la TDA se situaba en 3.0% que significaban 89 mil 458 personas, y en mayo 2009 la TDA era de 3.1% que representó 101 mil 296 personas. Los sectores que fueron más afectados han sido construcción con 8.6%, sector financiero 4.4%, manufacturas 4.2%. El subempleo subió de 32.6 que era en mayo de 2008 a 40.3% de la PEA para el 2010.

Por su parte, la Secretaría de Trabajo calcula que el desempleo directo afecta a 1.5 millones de personas, y cada año alrededor de 200 mil nuevos trabajadores (entre 16 y 25 años) se frustran por no encontrar la oportunidad laboral que buscaban. La combinación de decisiones económicas con trasfondo político (entre ellas el aumento de 63% en el monto del salario mínimo decretado en 2009, la crisis recurrente, la crisis económica internacional y la crisis política) provocaron la pérdida de más de 100 mil empleos en el último año. La inversión privada en el 2009 tuvo una caída de 33% y para el 2010 se espera una recuperación de 4%; modesta pero en terreno positivo solo si compara con el año anterior. Para los especialistas el esfuerzo de este año no alcanzó

para recuperar las pérdidas que se dieron con la crisis del 2009 y no se van a recuperar en los próximos dos años.

A ello se agrega que Honduras aún no logra normalizar su acceso a recursos de la comunidad internacional, créditos, cooperación y donaciones, por lo que para el gobierno del Presidente Lobo ha sido prioritario revertir el aislamiento diplomático internacional. Falto de ingresos hasta para cancelar la planilla mensual gubernamental, Lobo está obligado a buscar más recursos que inevitablemente repercutirán en el endeudamiento interno, a través de bonos que compra la banca local. De hecho, el sistema bancario-financiero (20 bancos) es el grupo empresarial más influyente del país, capaz de financiar con un fideicomiso de 10 mil millones de lempiras al gobierno de Zelaya y al período de Micheletti juntos y cerrar un año tan difícil como el de 2009 con 12.5% de incremento en sus utilidades. En contraste, la insolvencia actual del gobierno de Lobo le impide cumplir en tiempo y forma las obligaciones contractuales con los gremios, en particular los magisteriales y de la salud, o atender las demandas sociales básicas de la población. Ello no frena que el de Presupuesto General de la República para el 2011 se haya incrementado en más de 7 mil millones de lempiras con respecto al 2010. ¿De dónde financiará la ampliación?

No se sabe, pero es una de las preocupaciones básicas del FMI, reflejadas en la negociación de un programa cuyo objetivo fundamental es la sostenibilidad fiscal. En contraste con los temores de la población, los miembros del Gabinete Económico enfatizaron que no se tomarán medidas adicionales, como nuevos “paquetazos”, lo que en realidad no es cierto, como se apunta más adelante en este balance. El temor permanente de una eventual devaluación –deslizamiento o como quiera llamarse- preocupa si se toma en cuenta el imparable aumento en el Índice de Precios al Consumidor (IPC). Producto de las lluvias y pérdidas de cosecha, Honduras ha experimentado una reducción en la producción de legumbres y verduras, lo cual ha incidido de manera directa en el alza de precios de estos productos.

A diciembre de 2010 la inflación interanual fue de 6.5% y la inflación promedio del año 4.7%. Los rubros que más impacto tienen a nivel inflacionario durante el año por su orden son: educación, combustible, salud.

Adicionalmente, hay que indicar que el impacto en el aumento de la inflación se distribuye de manera inequitativa a nivel de las regiones del país, afectando de manera directa y sostenida a las zonas más pobres del país: occidente y oriente.

Región	Variación
Central Metropolitana	5.9
Resto Central	7.7
Norte Metropolitana	7.0
Resto Norte	5.7
Sur	7.0
Oriental	7.2
Occidental	7.8

También el BCH, reporta mejorías a nivel de los ingresos por divisas al país, pero si los mismos se comparan con el 2009. No obstante, si los mismos datos se comparan con respecto al 2008, se ve que Honduras todavía no logra llegar a los niveles alcanzados, que dicho sea de paso tampoco eran nada halagadores.

Para el 30 de diciembre, de 2010 los principales indicadores reportados por el BCH se mostraban de la siguiente manera:

Rubros	2008	2009	2010
Exportaciones de bienes	1,445.7	1,326.2	1,544.8
Maquila	1,037.5	752.7	867.1
Remesas	2,705.2	2,402.5	2,529.7

Un punto importante, por su impacto social, son las remesas familiares, la mayoría procedentes de EEUU y España, que para el mes de diciembre de 2010 ascendieron a USD 2,529.7 millones, que representan USD 127 millones más que lo registrado en diciembre de 2009, pero menos en US$ 176 millones con respecto al 2008. Pese a la aprobación de leyes en contra de la inmigración ilegal y la crisis económica de EEUU, el flujo de remesas de los emigrantes tuvo un cierto repunte después del Golpe de Estado, como respuesta de los hondureños (as) conscientes de que sus familias la estaban pasando mal. En términos del Estado, los desafíos más importantes continúan siendo: incrementar los ingresos tributarios, reducir el déficit fiscal, mejorar la situación financiera de las empresas estatales y la reapertura de los flujos externos de capital, inversión privada y cooperación multilateral y bilateral. Para la mayoría de la población el desafío fundamental es ***sobrevivir***.

5. El cuadro social que no entra en el acuerdo

Mientras el FMI y el gabinete económico pretenden ponerse de acuerdo, la realidad social avanza de manera implacable. En el 2010 la población hondureña alcanzó los ocho millones de habitantes. De acuerdo con el INE, para mayo del 2010 el 66.2% se encuentra bajo la línea de la pobreza, 45.3% en pobreza extrema y 21% en pobreza relativa.

Los datos son más angustiantes, si se revisa el período de ejecución de la Estrategia de Reducción a la Pobreza (ERP). Las investigaciones del FOSDEH, siempre con datos del INE, lamentablemente indican que el número de personas viviendo en condiciones de pobreza se incrementó en 1,261,672 durante la última década (2000-2010) a pesar de que en este mismo periodo, se gastaron Lps.147 mil 822 millones en el marco de la ERP que equivalen a US$ 7,825 millones.

	Año Inicial (2001*)			Año Final (2010*)			Diferencias		
Unidades	**Pobres**	**Relativa**	**Extrema**	**Pobres**	**Relativa**	**Extrema**	**Pobres**	**Relativa**	**Extrema**
%	63.7	19.5	44.2	60.0	20.9	39.1	-3.7	1.4	-5.2
No. Hogares	786,529	240,263	546,265	1038,863	362,130	676,733	252,334	121,867	130,467
Aprox. No. De Personas	3,932,643	1,201,317	2,731,327	5,194,315	1,810,651	3,383,664	1,261,672	609,334	652,337

Por su parte, un estudio realizado por el Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo PNUD preveía que por efectos de la crisis internacional, para fines de 2009 Honduras tendría 60 mil nuevos pobres y 75 mil pobres más empobrecidos. Ese panorama se estimó a partir de un escenario de crecimiento económico proyectado de 1.5%, sin embargo, el país cerró ese año en rojo (-2.0%).

Según el Programa Mundial de Alimentos (PMA), este año 57% de los niños menores de cinco años presenta desnutrición (27% crónica). Al desagregar los resultados de inseguridad por zona muestran que la desnutrición severa es más elevada en las regiones sujetas a sequías y, en menor proporción, donde ocurren inundaciones.

El tema central en política social en Honduras es el incremento acelerado de la pobreza y el abandono o debilitamiento extremo de las políticas públicas encaminadas a su combate y/o reducción. Ello provoca que en el campo de la salud (minado por enfermedades pandémicas como el dengue), se viva un rebrote de “conflictos sociales”, y también de formas de lucha y protesta. Las respuestas sociales son y serán inevitables en tanto no haya capacidad del Estado de atender las demandas.

Dos escenarios actuales de alta conflictividad son: a) el agro (la crisis del Aguán puede ser vista como un preludio de algo nacional) y, b) la violencia extrema contra las mujeres (femicidio). El gobierno, de acuerdo con el esquema actual de ingresos y egresos, carece de recursos para sostener la inversión pública social. Su esperanzan son los recursos que aguarda con impaciencia

de la cooperación internacional (alrededor de 11 mil millones de lempiras). La mayoría no llegó este año, pero confía, como Penélope, que el siguiente si lo hará.

Al margen de la asistencia real, para afrontar los niveles de pobreza e indigencia se requieren acuerdos nacionales y territoriales que fortalezcan redes sociales de apoyo a los sectores más vulnerables a través de un gasto social eficiente y focalizado, así como el fortalecimiento del capital humano; clave para mejorar la productividad y reducir la pobreza. Sin embargo, las acciones del gobierno van en dirección contraria, como lo ejemplificó el "paquetazo fiscal" aprobado en marzo y que fue rechazado por la población mayoritaria.

En el tema educativo, un prolongado conflicto magisterial impidió de nuevo cumplir con los 200 días clases por año, pero alcanzar esa meta es más un formalismo deseado que un verdadero cambio en el sistema puesto que la mayoría de los alumnos de primaria y secundaria continúan asistiendo a escuelas y colegios con graves deficiencias en la enseñanza. Apenas 23% de los alumnos que lograron egresar de primaria completan los tres primeros años de educación secundaria y uno de cada cuatro integrantes de la fuerza laboral nunca completó el tercer grado de educación primaria. Las desigualdades aún son mayores entre la población urbana y la rural. Paradójicamente, el Estado hondureño destina un promedio de 7.3% del PIB para la educación, más del doble del promedio en América Latina, sin embargo, 95% del monto se destina a pagar salarios y ese porcentaje no deja de crecer.

Las debilidades del sistema educativo incluyen egresar una fuerza laboral deficiente, falta de acceso equitativo a las oportunidades educativas, deficiencias en la enseñanza y el aprendizaje, elevadas tasas de deserción y repetición, mala formación y capacitación de docentes, bajo rendimiento académico de los alumnos y una politización extrema en las instancias administrativas. La falta de un liderazgo político y educativo sostenido ha frustrado los intentos para resolver estos problemas y la reforma educativa también ha sido obstaculizada por poderosos intereses políticos, gremiales y empresariales. Bajo esas circunstancias cabe preguntar si ¿Es viable construir una democracia en un país con apenas cuatro grados de escolaridad y una población que ve aumentar sus niveles de pobreza e indigencia?

6. ¿Visión de País / Plan de Nación una salida a la crisis económica?

El segundo “logro” de la Administración Lobo Sosa es la puesta en marcha de la Ley de Visión de País – Plan de Nación, una legislación que en las condiciones actuales en las que se encuentra Honduras, debería ser una buena noticia, puesto que se esperaría encontrar en ella propuestas y herramientas que se adaptaran a los viejos y nuevos retos del país.

Sin embargo, la nueva ley más que una propuesta para reactivar de manera equitativa, económica y socialmente al país, como quiere aparentarse, es un plan de negocios de una parte del gran empresariado hondureño, en donde lo importante es construir la imagen de una Honduras “vendible o perfectamente concesionable” para sus homólogos internacionales a partir de recursos naturales, como el agua, e infraestructura estratégica.

Los avances de este nuevo plan de negocios si han sido significativos, entre ellos la aprobación de la Ley de Promoción de la Asociación Público – Privada, que ha abierto una carrera para la privatización de los ríos para generar energía eléctrica, y la discusión actual del Documento marco de políticas de Estado para la cooperación externa en Honduras, que pretende el alineamiento político y económico de la cooperación al plan.

Ese plan reparte recursos naturales, pero no establece políticas adecuadas para conservarlas, obviando la extrema vulnerabilidad nacional.

La conflictividad en el 2010

Efectivamente, Honduras es frágil a deslizamientos, generalmente asociados a altas precipitaciones y acumulación de agua y movimientos en masas en laderas, y en menor grado a movimientos sísmicos. La situación se ve agravada por la presencia de suelos sin cobertura, degradados e inestables, debido a un inadecuado uso y manejo, principalmente de la explotación de madera, ganadería y cultivos en laderas, obras de infraestructura (carreteras), y el desarrollo de asentamientos humanos.

En varios sitios el país fue víctima este año de múltiples hundimientos y deslizamientos, sobre todo en las partes altas de las cuencas de las zonas occidentales y norte, especialmente en caminos, carreteras, contornos de los cauces de los ríos, quebradas y hondonadas. Los productores de café, por ejemplo, reclaman constantemente por mejoras en las vías de acceso a las plantaciones. El impacto de esos desastres en las redes de infraestructura es muy fuerte y genera la necesidad de inversiones cuantiosas y de emergencia.

En el ámbito urbano, la ciudad de Tegucigalpa es la más vulnerable, por la existencia de una gran cantidad de asentamientos humanos en condiciones de riesgo por deslizamientos. Un solo “hoyo” en el bulevar de las Fuerzas Armadas cortó esa artería por más de tres meses, lo que da una idea de la debilidad nacional.

En la zona sur la sequía es el fenómeno más recurrente, asociado al mal manejo de los recursos naturales. Normalmente ocurre a inicios del año e incrementa su intensidad cuando está asociada al Fenómeno del Niño. Las reducciones en la cantidad y distribución de las lluvias generan no solo pérdidas de cosecha, sino también menores oportunidades de empleo, ingreso, incremento de precios, y cambios en el patrón de consumo de la población más vulnerable. Las familias más afectadas por la inseguridad alimentaría son las de productores sin tierra o con pequeñas parcelas dedicadas a la producción de auto-consumo, jornaleros y mujeres jefes de familia, siendo el grupo de población más afectado las mujeres embarazadas, madres lactantes y los niños menores de 5 años. Este año la producción de frijoles prácticamente desapareció por efecto de las lluvias.

Sin alimentos, los grupos sociales más afectados son también los más expuestos a la crisis de salud que tiene lugar en el país, con el persistente rebrote de enfermedades epidémicas (como el dengue) que reflejan una caída en la cobertura y eficiencia de los procesos de vigilancia epidemiológica, de asignación de recursos y la propia búsqueda de equidad como principio básico de una agenda pendiente de Reforma en Salud.

No hay duda que en el país los riesgos naturales de enfermar se convierten aceleradamente en amenazas graves y que ese paso está asociado a estratos de condiciones de vida y a la exposición a variables ambientales, étnicas, socio-culturales y otras que intervienen en la vida cotidiana de las personas. En el caso del dengue se presentan algunas excepciones con víctimas que tenían recursos económicos para ser atendidas, pero que fallecieron por la combinación de ausencia de una cultura sanitaria adecuada y mala asistencia médica. En todo caso, las excepciones confirman la regla de que muchos problemas de salud no ocurrirían de no existir factores sociales y ambientales facilitadores.

¿Qué hay en este plan de país para los sectores tradicionalmente excluidos?. Los objetivos, metas, lineamientos estratégicos e indicadores que contiene esta propuesta indudablemente suenan bonitas pero definitivamente no aguantan una confrontación con la realidad. Hay dos visiones en esta propuesta: la genuinamente empresarial, concentradora y extractora de los recursos a nivel regional para su propio beneficio y la visión de esa misma clase político-empresarial que asegura que le "duele la pobreza", pero sigue proponiendo para su solución medidas compensatorias.

Por ejemplo, erradicar la extrema pobreza para el 2038 es una meta, que se escucha agradable, que forma parte del ideal de la ciudadanía, pero que no tiene sustento ni al interior del mismo documento y menos en la práctica económica y social concreta en la que se maneja la clase político-empresarial del país. El famoso Bono 10 mil, que entrega mensualmente 826 lempiras a una familia, es infinitamente inferior al costo de la canasta básica para una sola persona al mes, calculada en 2,647 lempiras al mes, según cifras reportadas por el Instituto Nacional de Estadísticas (INE).

Este mismo organismo gubernamental, en su última encuesta de hogares, indica que en Honduras existen un total de un millón 737 mil 262 hogares, en los cuales habita un promedio de 4.6 personas. En el 20% de los hogares más pobres, el ingreso por persona, al mes, es de 380 en lempiras y en contraste el 20% de los hogares más rico tiene un ingreso promedio, por persona, al mes, de 7,761 lempiras, lo que significa un ingreso 20 veces más alto.

En resumen, el principal problema del país no es su pobreza, sino la inequidad, la injusta distribución de su riqueza y esa es una realidad que se sigue desestimando a nivel de todo el quehacer público y obviamente en el Plan de Nación.

A la luz de estos dos "logros" puede entenderse de mejor manera la situación de los principales indicadores económicos – sociales del país, que a continuación se describen:

Política fiscal perversa:

A pesar del impulso dado por el "Paquetazo 1", al 31 de diciembre, los ingresos acumulados suman Lps. 44,224 millones, que significan 5,708 millones menos a la meta total proyectada por la DEI que era de 49,932 millones. Sin embargo lo que resulta más contradictorio es que para el presupuesto del 2011 el gobierno espera recaudar un 14.7% adicional. ¿Cómo lograr esta meta?

Es una respuesta aún sin aclarar. Hasta el momento no existe una estrategia que provoque un verdadero impulso a la reactivación productiva del país que permita una mayor tributación y en contraste, los sectores que actualmente están siendo beneficiados pertenecen al selecto grupo empresarial que goza de exenciones y exoneraciones fiscales que en promedio le han costado al país alrededor de 11 mil millones de lempiras.

Las mismas investigaciones de la DEI indican que por cada puesto de trabajo creado en empresas que gozan de exoneraciones fiscales, el país deja de percibir alrededor de 8 mil lempiras. Es decir que solo hay que multiplicar el número de empleados que tienen los sectores económicos que gozan de mayores exenciones para tener una dimensión de los costos que estos beneficios tienen para el país.

A juicio del FOSDEH, el verdadero impulso se está dando a un tipo de política fiscal perversa que busca "recaudar más" especialmente de la clase media y pobre o de la micro y mediana empresa a partir de un aumento a los impuestos

directos e indirectos (tarifas de servicios públicos, nuevos o alzas de impuestos, aumentos a la gasolina, privatización de los servicios sociales, etc.)

Las reformas fiscales hechas han estado orientadas al incremento de la recaudación como fuente principal del financiamiento del incontenible gasto público, especialmente el gasto corriente que no tiene impactos positivos en los sectores de población en condiciones de pobreza. Esta situación ha llevado a la profundización de una política fiscal "perversa", en tanto contribuye a mayores niveles de pobreza y desigualdad entre los diferentes estratos de la población, en vista que hay un traslado de los incrementos de pagos de impuestos de las empresas, productores y prestadores de bienes y servicios vía precios en la cadena de producción y comercialización al consumidor final. Considerando que un poco más del 66% de la población se encuentra en condiciones de pobreza y por lo tanto de sus reducidos ingresos, que ni siquiera cubren para adquirir la canasta básica, vía precios una alta proporción son impuestos que les limita adquirir una mayor cantidad de bienes básicos, y por ende mejorar o siquiera mantener una determinada calidad de vida.

Deuda interna y externa otra vez impagable:

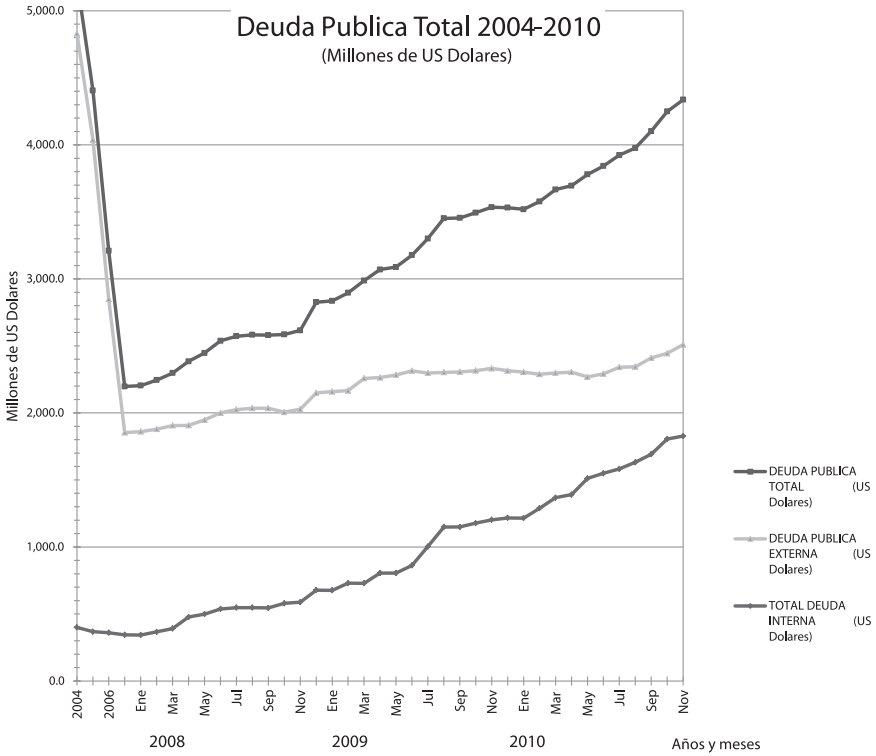
Pese a que el indicador de endeudamiento con respecto al Producto Interno Bruto (PIB), se mantiene por debajo del 30% como lo exige el FMI, es importante señalar el fuerte aumento que a nivel presupuestario se está destinando para el pago del servicio de la deuda externa. Para el 2010, el servicio de la deuda significa un pago de Lps. 7 mil 415 millones, que representa el 11% del presupuesto del gobierno central, sin embargo para el 2011, las autoridades de finanzas han presupuestado el pago de Lps. 13 mil 191 millones (para el pago de servicio de deuda interna se destinarán 9,737 millones de lempiras y para el pago de servicio de deuda externa 3,358 millones), que representará el 17.4% del presupuesto, que es superior a los recursos de cooperación que el país esperaría obtener y mucho más que el presupuesto destinado a la inversión pública social.

Una bomba de tiempo

Con relación a la deuda interna, hasta 2007 se había logrado una reducción gradual del saldo, ello como producto de las iniciativas del gobierno que tuvieron como resultado el fortalecimiento de los indicadores de sostenibilidad de L.6,508.2 millones, pasando de un ratio de 6.3% a 2.8% del PIB. Posteriormente, a partir de 2008 se observó una reversión de la tendencia a la baja a comparación de años anteriores. Es así que el ratio de deuda a PIB ascendió a 4.8%, debido principalmente a mayores colocaciones de deuda con el sistema financiero y organismos descentralizados. En 2009 se registró una profundización en los requerimientos de financiamiento por parte de la Administración Central. El saldo de deuda interna ascendió a 1,187.8 millones de dólares (equivalente a 8.3% del PIB), lo que implicó un aumento significativo respecto al saldo registrado al cierre de 2008, y estuvo principalmente asociado a los mayores requerimientos de recursos dirigidos a financiar operaciones de apoyo presupuestario. Además, la recaudación tributaria se desplomó como producto del impacto de la crisis financiera, la cual afectó sobre todo a la recaudación de impuestos y aranceles a la importación, y limitó la capacidad de generar recursos internos. En el 2010 no hubo cambios significativos en esa tendencia. Lobo tuvo que recurrir en el primer trimestre de su mandato a la banca nacional para absorber parte de su liquidez a cambio de bonos con tasas comerciales.

El pago de la deuda para el 2011 es el renglón presupuestario de mayor crecimiento para el próximo año, al grado que absorbe 78% del incremento presupuestario para las instituciones del Gobierno Central, lo que pone de manifiesto el enorme peso y el mal manejo del endeudamiento que Honduras ha tenido después del proceso de desendeudamiento externo otorgado por la comunidad internacional.

Actualmente se ha indicado por parte de las autoridades de finanzas que la deuda interna del país es de más de 38 mil millones de lempiras, el déficit acumulado a diciembre de 2009 era de más de 52 mil millones de lempiras y la deuda externa ronda los 3,600 millones de dólares. En términos globales (deuda interna y externa) la deuda del sector público no financiero es de más de US$ 4,336.3 millones.



Sumado a lo anterior, debe reiterarse que el desembolso de estos recursos de préstamos se sigue haciendo a cuentagotas. A diciembre, apenas se habían desembolsado US$ 288 millones de dólares de los más de US$ 2,533 millones que han sido contratados y disponibles para ser utilizados y sobre los cuales Honduras está pagando servicio de deuda. Las justificaciones por los enormes desfases van desde la poca capacidad del gobierno para ejecutar recursos, los enormes retrasos que existen en los proyectos por el cambio de gobierno y la contratación de activistas – no técnicos- en las direcciones de los programas y proyectos, pero también reflejan la poca confianza de la comunidad internacional en las actuales autoridades.

Los abusos del gasto corriente:

El gasto corriente es uno de los principales problemas de las finanzas públicas hondureñas, y la tendencia, pese a los compromisos suscritos con el FMI, es al aumento. Este gobierno, como todos los anteriores, continúa con la estrategia de "compra de gobernabilidad", aunque la misma sea en condiciones cada vez más precarias y por períodos más cortos. A nivel de cifras diremos que el 13.5% del PIB se destina a sufragar el gasto corriente y que la meta programada con el fondo indica que debe ser de 9.2% o dicho con cifras más contundentes: el 90% del Presupuesto General de la República para el gobierno central se destina al gasto corriente y únicamente un 10% para inversión pública. En otras palabras, de cada lempira en poder del gobierno, 0.72 centavos se destinan para sufragar su gasto corriente.

Una tendencia preocupante

Durante el período 2001-2009, la tasa de desocupación promedio ascendió a 4.1% de la Población Económicamente Activa (PEA). De acuerdo con los datos de las primeras rondas de la Encuesta Permanente de Hogares de Propósitos Múltiples (EPHPM) del Instituto Nacional de Estadísticas de Honduras (INE), al cierre de 2009 el total de desocupados era aproximadamente 101,296 personas, cifra que equivalió a un aumento de 13.2% respecto al número de personas desocupadas registradas al cierre de 2008. En el 2010 el panorama no mejoró, más bien su tendencia fue a empeorar debido a la falta de inversión pública y al escaso dinamismo productivo. El desempleo directo es cada vez más preocupante, al tiempo que se mantienen los elevados promedios de mercado informal de mano de obra.

¿Es posible mantener este gasto? Las cifras de ingreso tributario señalan que no; que pese a que puedan darse pequeños incrementos estos no deben ser utilizados para cubrir los excesos de gasto corriente, especialmente los sueldos y salarios, que reciben más de 190 mil personas que laboran en la administración pública.

Paralelamente, al tema salarial, es importante destacar el alza en los presupuestos de gastos superfluos como viajes, viáticos arrendamiento de helicópteros, remodelación de oficinas, dispositivos de seguridad constituidos con más de 40 personas, anuncios publicitarios, entre otros. Algunas cifras: El gobierno central tiene presupuestado para el 2011 a nivel del gobierno central destinar un poco más de 326 millones de lempiras en pasajes y viáticos, 112 millones para sufragar gastos de servicios ceremoniales, protocolo y vigilancia; 206 millones para alquileres de edificios, viviendas, equipo de oficina, tierras y 7 millones para el pago de telefonía celular.

En aumento el déficit presupuestario:

Como consecuencia de los excesos de gasto corriente y de la escasa planificación presupuestaria, al 5 de octubre del año en curso, el país registraba un total de 11 mil 583 millones de lempiras en gastos sin imputación, dicho en otras palabras, el 17% del presupuesto original, no había sido presupuestado. A su vez, entre marzo y octubre el Congreso Nacional, a petición de las distintas dependencias, aprobó ampliaciones presupuestarias por un monto total de 2,628 millones de lempiras.

A la luz del proyecto de Presupuesto General de la República para el 2011 también parece ilusorio pensar que los presupuestos de dependencias como salud, educación, COPECO, Agricultura, Turismo o Cultura serán más bajos que en el 2010, por lo cual es seguro que en el transcurso del 2011 estas dependencias demanden más recursos con lo cual el déficit presupuestario también aumentará.

Una inversión pública totalmente debilitada:

Lejos de establecer a la inversión pública como el mecanismo idóneo para mejorar las condiciones sociales del país, el gobierno año con año debilita este presupuesto.

Para el presente año, el presupuesto total de inversión fue de 13 mil 641 millones, que representa apenas el 10% del total del presupuesto total. Sin embargo, al 10 de septiembre apenas se había ejecutado el 31% de este monto.

Un segundo problema en este tema lo constituye la orientación de la inversión, puesto que el 55% de los recursos se destina al área de comunicación y energía (que son los mismos temas que destaca el gran empresariado en la Visión de País) y en contraste se dedica un 0.7% a temas de competitividad y MIPYMES… ¿qué país puede solucionar sus problemas de sub desarrollo con estos montos y este tipo de orientación?

Para el 2011, el tema es mucho más complicado puesto que el presupuesto para inversión pública en lugar de aumentar disminuye. La propuesta es que se destinen únicamente 8 mil 384 millones de lempiras, lo que representa apenas el 6% del presupuesto.

A las mujeres les va peor

En el 2010 el Instituto Nacional de la Mujer (INAM) recibió un premio internacional por su labor, sin embargo, Honduras se encuentra entre los países de la región centroamericana que presentan situaciones más desfavorables en términos de equidad de género, las cuales se miden a través del Índice Global de Desigualdad de Género. Ni siquiera en el campo político hubo avances significativos puesto que pese a la vigencia de la Ley de Igualdad de Oportunidades, la cual pretende asegurar –sin éxito- la participación mínima de un 30% de las mujeres en los diferentes puestos de elección popular, según datos recientes del Tribunal

Supremo Electoral (TSE)7 tan solo el 5.0% y el 26.5% de las corporaciones municipales son lideradas por mujeres en el cargo de alcaldesas y vicealcaldesas, respectivamente, para el período 2010-2014. En cuanto al Congreso Nacional, los datos también son desalentadores, ya que las mujeres quienes ostentan las diputaciones propietarias únicamente representan el 19.5% del total, mientras que solo el 24.2% del total de diputaciones suplentes son ocupadas por mujeres. Estas estadísticas reflejan que, una vez más, la participación política de las mujeres en Honduras es significativamente menor en comparación a la de los hombres. En términos de equidad de género, los principales rezagos del país, comunes al resto de la región, se encuentran además en el ámbito de una equitativa y favorable incorporación de la mujer al mercado de trabajo y a la estructura productiva. El ingreso laboral de las mujeres, en iguales condiciones laborales y capacidades, solo representa aproximadamente el 67.6% del salario promedio devengado por los hombre. Conseguir que la incorporación de la mujer a los ciclos productivos se traduzca en una equiparación de las posibilidades económicas y laborales entre género sigue siendo un reto pendiente en Honduras.

Del total de los recursos un 72% se utilizarán por el gobierno central, para financiar 286 proyectos especialmente de viabilidad (SOPTRAVI, Fondo Vial y Cuenta del Milenio); y el 28% restantes será destinado a las instituciones descentralizadas y desconcentradas, quienes tendrán por prioridad la inversión en proyectos de generación de energía eléctrica y telecomunicaciones.

Crecimiento económico vrs, ingresos vrs. Inflación:

Es muy poco probable que Honduras logre un crecimiento del 2.4%, puesto que todo el entorno es desfavorable para el inversionista nacional: mayores cargas tributarias, cierre de negocios, falta de oportunidades para las MIPYMES y de crédito en condiciones favorables, etc); la única posibilidad es a partir de la inversión externa, que se verá patrocinada por la Ley Público Privada (que favorecerá a un reducido sector de la población), especialmente en áreas de generación de energía, telecomunicaciones, infraestructura, pero que

necesitará contar con una “seguridad jurídica” que respalde sus inversiones, elemento que no está totalmente garantizado en el país.

No se puede negar, que el país con respecto a las cifras registradas en el 2009, un año totalmente atípico, ha mejorado, pero si lo comparamos con el 2008, los indicadores siguen siendo negativos. Las remesas, de la población pobre del país que migró en busca de oportunidades de vida, son las que siguen sosteniendo económicamente a Honduras.

Todo parece indicar que la sobrevivencia en países como Honduras será cada vez más dura y lo más grave es que la clase política – empresarial que administra el país continúa dando respuestas que rayan con el populismo, el proselitismo y la publicidad mediática.

La violencia como secuela

Un tema de particular gravedad relacionado con el deterioro general del país es el avance del crimen organizado, en especial del narcotráfico y algunas de sus secuelas, como el sicariato (asesinos profesionales). Una de las víctimas –cerrando el 2009- fue el jefe de la Dirección Nacional de Lucha contra el Narcotráfico en Honduras, Julián Arístides González. Desde el Presidente Lobo hasta el Fiscal Rubí prometieron “dar con los responsables”, pero el caso terminó en ese archivador de la impunidad que crece día con día. Por su ubicación geográfica y debilidad del sistema de operadores de justicia, Honduras siempre ha sido un punto clave para el narcotráfico, pero en los últimos dos años aumentó el uso de su territorio como lugar de estadía de narcotraficantes (se ha llegado a afirmar que el célebre “Chapo” Guzmán ha establecido un centro de logística y operaciones en el occidente del territorio nacional), de tránsito y almacenaje de droga, tras la guerra declarada por los gobiernos de Colombia y México a sus carteles. En respuesta, EEUU ha incrementado su programa de apoyo (17 millones de dólares) a la lucha anti narcotráfico del gobierno hondureño, como parte del llamado Plan Mérida. En ese marco se inscriben la inauguraron de una base naval (conjunta) para el combate del narcotráfico en el Caribe hondureño y la suscripción de acuerdos de combate al narcotráfico entre Honduras y diversos países, entre ellos Colombia, Perú e Italia. El potencial desestabilizador del narcotráfico es de alto riesgo para nuestra nación.

¿Qué pasará entonces con Honduras, a corto y mediano plazo?. No se sabe con exactitud. Sin embargo, lo que queda claro es que si el país sigue como está, esquivando la toma de decisiones justas y equitativas, promoviendo una reconciliación discursiva, y haciendo negocios que atentan en contra de la ya difusa democracia, es seguro que el escenario nacional se vuelva más pesimista y la dinámica de cambios profundos que necesita el país se queden estancados.

Brechas que se profundizan sin respuestas

El Índice de Desarrollo Humano (IDH) de Honduras se mantuvo en mejoría durante las décadas de 1980 y 1990, pero luego se estancó. En la actualidad, es uno de los países de la región con menores logros en este aspecto. Honduras adolece de la menor renta per cápita (ajustada por la paridad del poder adquisitivo) y su esperanza de vida se encuentra entre las más bajas de los países de la región centroamericana. El avance en la cobertura de la enseñanza primaria es la variable que ha experimentado la mejor evolución dentro de las que integran el IDH. La inequidad de ingresos que forma parte de la realidad hondureña mantiene una estrecha interrelación con otros factores esenciales de la vida, por ejemplo, con el acceso a educación y a la salud, entre otros, que conforman las libertades básicas de la ciudadanía. Los niveles de pobreza son muy elevados en el país; Tegucigalpa y el departamento de Cortés, que se sitúan como focos de desarrollo, presentan los menores grados de pobreza. Sin embargo, estos alcanzan niveles importantes en el medio rural. En los departamentos, eminentemente rurales, ubicados en el eje lenca, al oeste del país y en el departamento de Choluteca en el sur, se estima que más del 80% de la población no tiene la capacidad económica de cubrir sus necesidades básicas. Estructuralmente, por lo tanto, el desarrollo social en el oeste se distribuye de forma paralela al de desarrollo central Tegucigalpa–departamento de Cortés, mientras que los departamentos del este sufren de niveles de pobreza intermedios. El análisis interno del país, a nivel de sus unidades departamentales y municipales, muestra importantes inequidades en el desarrollo humano. Solo 11 municipios de los 298 presentan un índice de desarrollo humano medio-alto. Estos se ubican esencialmente en el norte y en el centro del país. Varios de ellos corresponden a zonas urbanas, como Tegucigalpa y San Pedro Sula, y a regiones con actividades dinámicas en turismo, como

Islas de la Bahía. Los territorios más desfavorecidos, con niveles de desarrollo humano bajos y medio-bajos (152 municipios) se concentran en el occidente de Honduras y en ciertas regiones del centro y en el extremo este del país. Las disparidades se enfatizan aún más al analizar la condición del desarrollo humano al interior de algunos departamentos. A manera de ejemplo, en el departamento de Ocotepeque, el municipio de Dolores Merendón presenta un IDH bajo (0.477), mientras que el municipio de Ocotepeque cuenta con un IDH medio de 0.672. Otro ejemplo de las fuertes disparidades internas es el departamento de Francisco Morazán, con el municipio de Distrito Central que tiene un índice de desarrollo humano medio alto (0.759), en marcado contraste con la situación de la población de Curarén (IDH = 0.511, medio-bajo). En general, se puede pronosticar que las brechas económicas entre regiones y municipios en Honduras están lejos de resolverse, y en muchos casos más bien se están ampliando. De esta manera se profundizan las condiciones de desigualdad territorial y social que dificultan el mejoramiento de la realidad socioeconómica de la población. Esta situación vuelve extremadamente difícil la tarea de construir la ciudadanía social. En la actualidad, Honduras refleja un avance moderado en materia de desarrollo humano, que puede explicarse por varias razones: una economía con un crecimiento bajo y con muy poco avance dirigido a la generación de empleo productivo; un Estado con fragilidad a nivel institucional y una ciudadanía cada vez más restringida a la vida privada, como producto de los altos niveles de crecimiento de la violencia cotidiana, lo que produce mayores niveles de emigración.

6. Sin otra salida más que cambiar

Como se afirmó anteriormente, el Plan de País o la Visión de País carecen de un enfoque social y se caracterizan más por ser una estrategia de negocios. Esa es la realidad de la nueva cartografía nacional que divide al territorio en cuencas y sub cuencas. Con Lobo se dejó de hablar de los grandes proyectos hidroeléctricos –que formaron parte del arsenal demagógico de los gobiernos anteriores – y se terminó de abandonar la Estrategia de Reducción de la Pobreza (ERP). Sin embargo, un país no puede ser estable sin una visión social y económica que atienda los intereses de las mayorías. Algo debe sustituir a la ERP y no son los Objetivos del Milenio puesto que, pese a sus coincidencias, responden a lógicas diferentes. Lobo tiene la responsabilidad de hacer un compromiso y un esfuerzo serio de combate a la pobreza y a las desigualdades, y estimular la participación ciudadana.

De la extinta ERP habrá que rescatar lo bueno, profundizarlo y ampliarlo, al tiempo que se evite una repetición de sus errores. Pero se trata de articular una nueva estrategia que implica el esfuerzo mancomunado del gobierno, sociedad civil y cooperación internacional. No se trata de asistencialismo sino de reconocer el derecho de los pobres a los factores de producción, incluyendo el desarrollo del capital humano, y la provisión de redes de seguridad social a favor de los sectores de la población en condiciones de extrema pobreza. En general, el FOSDEH enfatiza el enorme riesgo de la carencia en la actual administración, y desde la oposición misma, de un conjunto de políticas económicas que atendiendo la crisis actual se apliquen con visión de largo plazo en el ámbito productivo, laboral, territorial y social, que procuren no solo la igualdad de oportunidades, sino también reducir las brechas en materia de logros efectivos y propicien una agenda democrática sólida.

La lucha contra las desigualdades debe exigirse como marco normativo para cualquier estrategia económica que sustente un nuevo enfoque político, incluyendo la formulación de un pacto fiscal, cada vez más urgente y necesario.

El Estado debe dejar de ser de unos pocos para volverse de todos, lo que demanda más transparencia, fiscalización y redistribución de recursos, y garantizar la sostenibilidad ambiental.

La sociedad hondureña no debe renunciar al valor de la igualdad por más utópico que se considere o muy difícil de alcanzar por la necedad de los grandes capitales a ceder parte de sus beneficios y privilegios.

La desigualdad recorre tantos sitios de nuestra geografía y de nuestra sociedad que es imposible negarla. Las asimetrías ya no sólo son violatorias de los derechos humanos, sino que improductivas económicamente hablando. Una democracia formal, de baja calidad y con poca participación de los más diversos actores en espacios de deliberación económicos y políticos difícilmente forjara una voluntad política para enfrentar una crisis de la magnitud de la nuestra.

En este Balance Anual donde predominan tareas y desafíos pendientes hay que destacar una gran responsabilidad de la comunidad financiera internacional, en especial los Organismos Financieros Internacionales, como el Banco Mundial, Fondo Monetario Internacional y Banco Interamericano de Desarrollo, que imponen sus programas y proyectos sin el seguimiento debido a las reformas institucionales y democráticas plasmadas en los documentos. Las instituciones financieras internacionales y en particular los bancos multilaterales para el desarrollo decepcionaron todos estos años por su alto espíritu burocrático y tecnocrático, y por su escaso compromiso con el mejoramiento de la calidad de la democracia hondureña.

Su preocupación formal, pero su escasa atención a las cuestiones sociales en materia de educación y salud, a la reducción de la pobreza y de las desigualdades, y al combate a la corrupción y la promoción de un capital social plural y diversificado, los vuelve cómplices de la crisis que estalló en el 2009.

La tendencia general de la evolución intelectual de estos organismos está marcada en particular por una politización creciente de carácter conservador y neo conservador que los llevó a privilegiar institucionalmente su relación con los gobiernos y a minimizar la calidad de interlocutores válidos de la ciudadanía. Eso debe cambiar. El perfeccionamiento del entorno legal y regulador, el aumento de la calidad de gobernabilidad del sector público y el fortalecimiento fiscal, no pueden ser viables sin reformas profundas en la política.

Mucho debe corregirse porque de parte de los Organismos Financieros Internacionales nunca hubo un “más allá del Consenso de Washington”, ni siquiera cuando el huracán Mitch (1998) probó los fallos de la política neoliberal. Pese a ello se siguió imponiendo una mirada funcionalista e instrumentalista que tiende, sin embargo, a desvalorar la importancia de la ciudadanía como factor de cambio.

Para el FOSDEH las reformas estructurales pendientes sólo pueden ser políticamente sostenibles en el largo plazo y lograr sus resultados esperados si se llevan adelante bajo condiciones específicas: gobiernos legítimos, regulaciones económicas adecuadas, participación activa por parte de los más afectados directamente (ciudadanía), una administración pública capaz y honesta, y un sistema descentralizado de implantación de políticas que genere la rendición de cuentas a todos los niveles.

Sostenemos que la gobernabilidad descansa sobre tres pilares: los procesos de toma de decisiones que afectan la economía de un país, la política y la implementación de políticas, no únicamente sobre los procesos electorales, como se ha concebido en Honduras. Aprendamos esa lección de una vez por todas antes que sea tarde; más tarde aún de lo que es ahora.